

**CONVENIO EUROPEO
PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO (REVISADO)**
La Vallette, 16 de Enero de 1992

PREÁMBULO

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los otros Estados partes del Convenio Cultural Europeo firmantes del presente Convenio (revisado),

Considerando que el fin del Consejo de Europa es lograr una unión más estrecha entre sus miembros, especialmente, a fin de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común;

Habida cuenta del Convenio Cultural Europeo, firmado en París, el 19 de Diciembre de 1954 y, especialmente, sus artículos 1 y 5;

Habida cuenta del Convenio para la salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa, firmado en Granada el 3 de Octubre de 1985;

Habida cuenta del Convenio europeo sobre las infracciones cometidas contra los Bienes Culturales, firmado en Delfos el 23 de Junio de 1985;

Habida cuenta de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria relativas a la arqueología y, especialmente, las Recomendaciones 848 (1978), 921 (1981) y 1072 (1988);

Habida cuenta de la Recomendación (89)5 relativa a la protección y puesta en valor del patrimonio arqueológico dentro del contexto de las operaciones de ordenación urbana y rural;

Recordando que el patrimonio arqueológico es un elemento esencial para el conocimiento de la historia de las civilizaciones;

Reconociendo que el patrimonio arqueológico europeo, testimonio de la historia antigua, está en grave peligro de degradación debido, tanto al incremento del número de importantes planes de ordenación, como a los riesgos naturales, las excavaciones clandestinas o desprovistas de carácter científico y, la todavía insuficiente información del público;

Comentarios
Carlos Alonso
Villalobos
Arqueólogo.
Centro de Arqueología
Subacuática.
Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico

Afirmando que es importante establecer procedimientos apropiados de control administrativo y científico dónde todavía no existan, y que la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico debe reflejarse en las políticas de ordenación urbana y rural y de desarrollo cultural;

Subrayando que la responsabilidad de la protección del patrimonio arqueológico incumbe no sólo al Estado directamente afectado sino también al conjunto de los países europeos, con el fin de reducir los riesgos de degradación y promover la conservación, favoreciendo los intercambios de expertos y la comparación de experiencias;

Constatando la necesidad de completar los principios establecidos en el Convenio europeo para la protección del patrimonio arqueológico, firmado en Londres el 6 de Mayo de 1969, como consecuencia de la evolución de las políticas de ordenación en los países europeos;

Han convenido lo siguiente:

Parece evidente que una correcta política de protección de los bienes del patrimonio arqueológico no puede basarse sólo en el soporte jurídico que ofrecen las leyes de patrimonio, sino que por medio del correspondiente desarrollo reglamentario de éstas, se deben buscar herramientas de gestión capaces de controlar las intervenciones que se efectúan sobre el marco espacial en el que se encuentran los yacimientos. Participar del diseño y seguimiento de los planes territoriales y urbanísticos es, en este sentido, la fórmula que se muestra más eficaz, dado que permite conocer, condicionar y controlar las intervenciones que se efectúan sobre el territorio para prevenir y mitigar, en su defecto, el impacto de las mismas sobre el patrimonio que en él se enclava. Existen, no obstante, tipologías específicas del patrimonio arqueológico que, por emplazarse mayoritariamente en la zona del dominio público marítimo terrestre, se escapan al eficaz control de estos planeamientos territoriales; es el caso, por ejemplo, de los bienes que conforman el *Patrimonio Cultural Marítimo*.

Este amplio patrimonio cultural lo conforman las diferentes soluciones técnicas dadas por los seres humanos, a lo largo de la historia, en su relación con el mar. Los fortines y baluartes costeros, las torres de vigilancia, los faros, las estructuras de antiguas almadrabas y corrales de pesca, las salinas,... y, también, los restos de las antiguas embarcaciones naufragadas (pecios) o abandonadas en las riberas son, en este sentido, exponentes de este variado, rico y peculiar patrimonio terrestre o sumergido, nacido como respuesta a necesidades concretas de tipo defensivo, de comunicación, de apoyo a la navegación, de captación de recursos, etc..

La cada vez mayor ocupación urbanística e industrial del litoral; las constantes recalificaciones de terrenos del dominio público (principalmente marismas y estuarios) y el relleno de los mismos para su cesión a los municipios con necesidades de suelo; las frecuentes regeneraciones de

playas y dragados portuarios; la contaminación por vertidos de los fondos marinos; la continua práctica ilegal de la pesca con artes de arrastre y el creciente expolio de este patrimonio que llega a alcanzar incluso las altas profundidades marinas son algunos de los agentes que están contribuyendo -directa e indirectamente- tanto a la destrucción de este patrimonio cultural, como a su descontextualización territorial.

Como respuesta a esta situación de riesgo y ante la vulnerabilidad de este patrimonio arqueológico, la propia UNESCO -con posterioridad al texto de la Carta que nos ocupa- ha planteado recomendaciones expresas para la protección de los mismos: la *Carta Internacional sobre la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático* (1996) y la *Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático* (2001). Pero la multicompetencialidad administrativa sobre la zona del dominio público marítimo terrestre y la falta de una política coordinada entre administraciones -tendente a la gestión integral de este espacio del dominio público- suponen, en la mayor parte de los casos, graves problemas para el control de las diferentes actuaciones que se efectúan sobre este medio, impidiendo en consecuencia el desarrollo del programa arqueológico preventivo. Así, por ejemplo, mientras que el control sobre las actividades con mayor capacidad "destructiva" que se realizan en el dominio público (regeneraciones de playas y remociones en el suelo de las mismas, dragados, etc.) compete en nuestro país -en virtud de la Ley de Costa- a la administración del Estado, el resto de las competencias (pesca, medio ambiente, etc.), incluida la tutela del patrimonio cultural, se encuentran en su mayor parte transferidas a las Comunidades Autónomas, desprovistas potencialmente de la capacidad de planificación y control de las referidas intervenciones.

Ante esta situación consideramos necesario que -en paralelo a la demostrada eficacia de los planeamientos territoriales como herramientas para el control de las posibles afecciones del patrimonio arqueológico por las intervenciones humanas sobre el medio- se apliquen medidas tendentes a una *gestión integral* del litoral en la que participen todas las administraciones con competencias en ese medio, mientras que, desde la propia normativa cultural, se buscan fórmulas acordes a las necesidades de tutela y protección que plantean los bienes que conforman esta variada tipología de nuestro patrimonio arqueológico.

Junto a todo lo anterior: la juventud y poco arraigo de la arqueología subacuática como principal disciplina encargada de su estudio; la falta de técnicos especialistas en este campo; la falta de concienciación social para con este patrimonio y el fuerte expolio al que se ve sometido, son, entre otras, coyunturas que contribuyen para que, aún en la actualidad, este patrimonio se encuentre relegado a un segundo plano dentro de los programas de la política cultural.

DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 1

1. El fin del presente Convenio (revisado) es proteger el patrimonio arqueológico en tanto que es considerado como fuente de la memoria colectiva europea y como instrumento de estudio histórico y científico;

2. A este efecto, son considerados como elementos del patrimonio arqueológico todos los vestigios, bienes y otras huellas de existencia de la humanidad en el pasado,

- a.** cuya salvaguardia y estudio permitan volver a trazar el desarrollo de la historia de la humanidad y su relación con el entorno natural;
- b.** cuyas principales fuentes de información sean las excavaciones y descubrimientos y otros métodos de investigación relativos a la humanidad y su entorno;
- c.** cuya localización sea cualquier espacio dentro de la jurisdicción de las Partes;

3. Están incluidos dentro del patrimonio arqueológico las estructuras, construcciones, conjuntos arquitectónicos, sitios ya desarrollados, objetos muebles, monumentos con otro carácter, así como su contexto, ya estén situados sobre la tierra o bajo el agua.

IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 2

Cada Parte se compromete a establecer, según las modalidades de cada Estado, un régimen jurídico de protección del patrimonio arqueológico que prevea:

- a.** La gestión y mantenimiento de un inventario de su patrimonio arqueológico y la clasificación de monumentos o de zonas protegidas;
- b.** La constitución de reservas arqueológicas, incluso cuando aparentemente no existan vestigios en la superficie o bajo el agua, para la preservación de testimonios materiales que puedan ser estudiados por las generaciones futuras;
- c.** La obligación del descubridor de comunicar a las autoridades competentes el descubrimiento fortuito de elementos del patrimonio arqueológico y de ponerlos a disposición para su examen.

Artículo 3

Con el fin de preservar el patrimonio arqueológico y garantizar el significado científico del trabajo de investigación arqueológica, cada Parte se compromete a:

- 1.** Aplicar procedimientos para la autorización y el control de las excavaciones y otras actividades arqueológicas a fin de:
 - a.** Prevenir toda excavación o desplazamiento ilícito de elementos del patrimonio arqueológico;
 - b.** Asegurar que las excavaciones y prospecciones arqueológicas se emprendan de forma científica, con la condición de que:
 - Se empleen métodos de investigación no destructivos, siempre que sea posible;
 - No se dejen descubiertos o abandonados los elementos del patrimonio arqueológico durante las excavaciones o después de ellas, sin que se hayan tomado las medidas pertinentes para su preservación, conservación y gestión;
- 2.** Velar por que las excavaciones y otras técnicas potencialmente destructivas se realicen sólo por personas calificadas y especialmente autorizadas;
- 3.** Someter a autorización específica, en los casos previstos por la legislación propia del Estado, el empleo de detectores de metales y de cualquier otro equipo o procedimiento de detección para la investigación arqueológica.

Artículo 4

Cada Parte se compromete a aplicar medidas para la protección física del patrimonio arqueológico, formulando disposiciones previas, según requieran las circunstancias:

- 1.** Para la adquisición o protección mediante otros medios apropiados, por parte de los poderes públicos, de espacios destinados a constituir zonas de reserva arqueológica;
- 2.** Para la conservación y mantenimiento del patrimonio arqueológico preferentemente en su lugar de origen;
- 3.** Para la disposición de almacenes apropiados para los vestigios arqueológicos que hayan sido desplazados de su lugar de origen.

CONSERVACIÓN INTEGRADA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 5

Cada Parte se compromete a:

- 1.** Buscar la conciliación y coordinación de las necesidades respectivas de la arqueología y de los planes de desarrollo, garantizando la participación de los arqueólogos en:
a. La elaboración de las políticas de planificación, para establecer estrategias equilibradas de protección, conservación y puesta en valor de los sitios que poseen un interés arqueológico;
b. En las distintas fases de la realización de los programas de desarrollo;
- 2.** Asegurar que exista una consulta sistemática entre arqueólogos, urbanistas y encargados de la ordenación del territorio en general, para alcanzar:
a. La modificación de los planes de desarrollo que puedan tener efectos negativos sobre el patrimonio arqueológico;
b. La concesión de tiempo y medios suficientes para efectuar un estudio científico adecuado del sitio, con la subsiguiente publicación de los resultados;
- 3.** Supervisar que los estudios del impacto medioambiental y la adopción de decisiones que de ellos resulten, den completa cuenta de los sitios arqueológicos y de su contexto;
- 4.** Disponer, cuando sea posible, la conservación *in situ* de los elementos del patrimonio arqueológico que hayan sido encontrados durante la realización de las obras;
- 5.** Garantizar que la apertura al público de los sitios arqueológicos y, en especial, las disposiciones necesarias para acoger a un gran número de visitantes, no suponga un perjuicio para el carácter arqueológico y científico de estos sitios y de su entorno.

FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Artículo 6

Cada Parte se compromete a:

1. Disponer de un apoyo financiero para la investigación arqueológica por parte de los poderes públicos -nacionales, regionales o locales-, en función de sus respectivas competencias;
2. Incrementar los recursos materiales para la arqueología preventiva:
 - a. Tomando las medidas pertinentes para que cuando se realicen los grandes proyectos de desarrollo -públicos o privados- esté previsto cubrir los costes totales de cualquier operación arqueológica necesaria relacionada con estos proyectos, mediante fondos suficientes procedentes del sector público o privado;
 - b. Incluyendo en los presupuestos de estos proyectos -con el mismo carácter que los estudios de impacto necesarios que se han impuesto en las previsiones de la planificación medioambiental y regional- prospecciones y estudios arqueológicos previos, documentos científicos de síntesis, así como la comunicación y publicación completa de los descubrimientos.

RECOGIDA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Artículo 7

Con el fin de facilitar el estudio y la difusión del conocimiento de los descubrimientos arqueológicos, cada Parte se compromete a:

1. Realizar o actualizar las investigaciones, inventarios y mapas de los sitios arqueológicos pertenecientes a su jurisdicción;
2. Adoptar toda disposición práctica adecuada con el fin de obtener, al término de las operaciones arqueológicas, un documento científico de síntesis publicable, previo a la necesaria posterior publicación integral de los estudios especializados.

Artículo 8

Cada Parte se compromete a:

1. Facilitar el intercambio nacional o internacional de elementos del patrimonio arqueológico para fines científicos profesionales, tomando siempre las medidas pertinentes para que este tipo de circulación no perjudique de ninguna forma el valor cultural y científico de dichos elementos;

2. Promover los intercambios de información sobre la investigación arqueológica y las excavaciones que se estén realizando, y contribuir en la organización de programas de investigación internacional.

SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO

Artículo 9

Cada Parte se compromete a:

1. Empezar acciones educativas con el fin de despertar y desarrollar en la opinión pública la conciencia acerca del valor que posee el patrimonio arqueológico para el conocimiento del pasado y de los peligros que pesan sobre este patrimonio;
2. Promover el acceso del público a los elementos de su patrimonio arqueológico, especialmente a los sitios, y fomentar la exposición al público de bienes arqueológicos debidamente seleccionados.

PREVENCIÓN DE LA CIRCULACIÓN ILÍCITA DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 10

Cada Parte se compromete a:

1. Organizar el intercambio de información entre los poderes públicos competentes y las instituciones científicas sobre las excavaciones ilícitas que hayan sido identificadas;
2. Informar a las autoridades competentes del Estado de origen, Parte de este Convenio (revisado), de cualquier oferta sospechosa de proceder de excavaciones ilícitas o de una ilegalidad cometida en excavaciones oficiales, y a proporcionar toda precisión necesaria al respecto;
3. En lo que concierne a los museos y otras instituciones similares cuya política de compras esté sometida al control del Estado, tomar las medidas necesarias para que éstos no adquieran elementos del patrimonio arqueológico sospechosos de proceder de descubrimientos incontrolados, excavaciones ilícitas o de una ilegalidad cometida en excavaciones oficiales;
4. Para los museos y otras instituciones similares situados en el territorio de una Parte, pero cuya política de compras no esté sometida al control del Estado:

- a. Transmitirles el texto del presente Convenio (revisado);
- b. No escatimar esfuerzos para asegurar el respeto por parte de dichos museos e instituciones hacia los principios establecidos en el párrafo 3;

5. Restringir, en la medida de lo posible, el traslado de elementos del patrimonio arqueológico procedentes de descubrimientos incontrolados, excavaciones ilícitas o ilegalidades cometidas en excavaciones oficiales, a través de la educación, la información, la vigilancia y la cooperación.

Artículo 11

Ninguna disposición del presente Convenio (revisado) debe suponer un perjuicio para los tratados bilaterales o multilaterales que existan o puedan existir entre Partes, en lo referente a la circulación ilícita de elementos del patrimonio arqueológico o a su restitución al propietario legítimo.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CIENTÍFICA MUTUA

Artículo 12

Las Partes se comprometen a:

- 1. Prestarse asistencia técnica y científica mutua mediante el intercambio de expertos y experiencias en las materias relativas al patrimonio arqueológico;
- 2. Impulsar los intercambios de especialistas de la conservación del patrimonio arqueológico, incluidos aquí los responsables de la formación continua, dentro del marco de las legislaciones nacionales pertinentes o de los acuerdos internacionales a los que estén vinculados.

CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO (REVISADO)

Artículo 13

Para los fines del presente Convenio (revisado), un comité de expertos constituido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en virtud del artículo 17 del Estatuto del Consejo de Europa, se encargará de hacer el seguimiento de la aplicación del Convenio (revisado) y en particular de:

1. Informar periódicamente al Comité de Ministros del Consejo de Europa de la situación de las políticas de protección del patrimonio arqueológico en los Estados Partes del Convenio (revisado) y de la aplicación de los principios enunciados en el mismo;
2. Proponer al Comité de Ministros del Consejo de Europa cualquier medida para poner en funcionamiento las disposiciones del Convenio (revisado), incluyendo las actividades multilaterales y la revisión o enmienda del Convenio (revisado), así como la información al público sobre los objetivos de dicho Convenio (revisado);
3. Hacer recomendaciones al Comité de Ministros del Consejo de Europa relativas a la invitación de Estados no miembros del Consejo de Europa a adherirse al Convenio (revisado).

CLÁUSULAS FINALES

Artículo 14

1. El presente Convenio (revisado) queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y de los otros Estados Partes del Convenio Cultural Europeo. Estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa.
2. Un Estado Parte del Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, firmado en Londres el 6 de Mayo de 1969, no podrá depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si no ha denunciado ya dicho Convenio o si no lo denuncia simultáneamente.
3. El presente Convenio (revisado) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que cuatro Estados, de los que al menos tres serán Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento a quedar vinculados al Convenio (revisado) conforme a las disposiciones de los párrafos precedentes.
4. En el caso que, en aplicación de los dos párrafos precedentes, el efecto de la denuncia del Convenio del 6 de Mayo de 1969 y la entrada en vigor del presente Convenio (revisado) no fueran simultáneos, un Estado Contratante podrá declarar, al tiempo del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, que continuará apli-

cando el Convenio del 6 de Mayo de 1969, hasta la entrada en vigor del presente Convenio (revisado).

5. Con respecto a cualquier Estado firmante que manifieste posteriormente su consentimiento a quedar vinculado al presente Convenio (revisado), éste entrará en vigor seis meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 15

1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio (revisado), el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a cualquier otro Estado no miembro del Consejo de Europa, así como a la Comunidad Económica Europea, a adherirse al presente Convenio (revisado) por decisión tomada por mayoría, prevista en el artículo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa, y por votación unánime de los representantes de los Estados Contratantes que tengan derecho a participar en el Comité.

2. Con respecto a cualquier Estado que se adhiera o para la Comunidad Económica Europea, en caso de adhesión, el Convenio (revisado) entrará en vigor seis meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión ante el Secretario General del Consejo de Europa.

Artículo 16

1. Cualquier Estado podrá especificar el territorio o territorios a los que se aplicará el presente Convenio (revisado), al tiempo de la firma o cuando deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. En cualquier otro momento posterior, todo Estado podrá extender la aplicación del presente Convenio (revisado) a cualquier otro territorio que especifique, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. El Convenio (revisado) entrará en vigor respecto a ese territorio seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.

3. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos precedentes podrá retirarse, con respecto a cualquier territorio especificado en la misma, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.

Artículo 17

- 1.** En todo momento, cualquier Parte podrá denunciar el presente Convenio (revisado) dirigiendo una notificación al Secretario General del Consejo de Europa.
- 2.** La denuncia tendrá efecto seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.

Artículo 18

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa, a los otros Estados Partes del Convenio Cultural Europeo, así como a la Comunidad Económica Europea y a cualquier Estado que se haya adherido o haya estado invitado a adherirse al presente Convenio (revisado):

- 1.** Cualquier firma;
- 2.** El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
- 3.** Cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio (revisado), conforme a sus artículos 14, 15 y 16;
- 4.** Cualquier otro acto, notificación o comunicación relativa al presente Convenio (revisado).

En testimonio de lo cual, los que suscriben, debidamente autorizados a este efecto, han firmado el presente Convenio (revisado).

Realizado en La Vallette, el 16 de Enero de 1992, en francés e inglés -siendo ambos textos igualmente auténticos-, en un único ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa lo comunicará mediante copia certificada a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a los otros Estados partes del Convenio Cultural Europeo, así como a la Comunidad Económica Europea o a cualquier Estado no miembro invitado a adherirse al presente Convenio (revisado).